

ISSN: 2500-5300 | DOI: <http://dx.doi.org/10.21789/razon.2500-7807>

RAZÓN CRÍTICA
REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS, SOCIALES Y HUMANOS

Revista Razón Crítica

ISSN: 2500-7807

razoncritica@utadeo.edu.co

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo

Lozano

Colombia

Terán Serna, José Enrique; Martínez, Angely; Torres Riascos, Ángel Celio
Impactos socioespaciales de la violencia en Colombia: análisis de la distribución,
localización y evolución de los grupos paramilitares en Medellín y Montería del 2002 al
2008

Revista Razón Crítica, núm. 3, julio-diciembre, 2017, pp. 49-83
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Bogotá, Colombia

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=645867490005>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

IMPACTOS SOCIOESPACIALES DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA: ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN, LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS GRUPOS PARAMILITARES EN MEDELLÍN Y MONTERÍA DEL 2002 AL 2008*

*José Enrique Terán Serna^(a), Angely Martínez^(b), Ángel Celio
Torres Riascos^(c)*

SOCIAL AND SPATIAL IMPACTS OF VIOLENCE IN COLOMBIA: ANALYSIS
OF DISTRIBUTION, LOCALIZATION, AND EVOLUTION OF PARAMILITARY
GROUPS IN MEDELLIN AND MONTERIA FROM 2002 TO 2008

IMPACTOS SOCIOESPACIAIS DA VIOLÊNCIA NA COLÔMBIA: ANÁLISE
DA DISTRIBUIÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS GRUPOS
PARAMILITARES EM MEDELLÍN E MONTERÍA ENTRE 2002 E 2008

Fecha de recepción: 13 de septiembre del 2016

Fecha de aprobación: 24 de agosto del 2017

Sugerencia de citación:

Terán Serna, J. E., Martínez, A. y Torres Riascos, Á. C. (2017). Impactos socioespaciales de la violencia en Colombia: análisis de la distribución. *Razón Crítica*, 3, 49-83, doi: <http://dx.doi.org/10.21789/25007807.1241>

* Este documento de investigación se elaboró en el marco del curso de Métodos de Análisis Socioespacial de la Maestría de Investigación en Estudios Urbanos 2015-2017 de la Flasco-Ecuador, por los estudiantes en proceso de grado Angely Martínez Girón, socióloga de la Universidad del Atlántico; José Enrique Terán Serna, sociólogo de la Universidad del Atlántico, y Ángel Torres Ingeniero, geógrafo del medio ambiente de la Universidad de las Fuerzas Armadas.

(a) Sociólogo de la Universidad del Atlántico; actualmente estudiante de la maestría en estudios urbanos de la Flasco Ecuador, Quito – Ecuador. <http://orcid.org/0000-0003-1582-1795>. jteran_10@hotmail.com

(b) Socióloga de la Universidad del Atlántico; actualmente estudiante de la maestría en estudios urbanos de la Flasco Ecuador, Quito – Ecuador. <http://orcid.org/0000-0001-9231-9972>. ange.martinez@hotmail.com

(c) Ingeniero Geógrafo y del medio ambiente de la Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE; estudiante de la maestría en estudios urbanos de la Flasco Ecuador, Quito – Ecuador. <http://orcid.org/0000-0002-5256-9800>. angel8torres7@gmail.com

RESUMEN

La violencia en Colombia ha estado marcada, durante más de medio siglo, por la lucha política de élites y grupos de poder para apropiarse y controlar la tierra. Es por esto que la evolución histórica del conflicto, desde sus inicios, con la lucha bipartidista de los años 40 –que inicia con la muerte de Gaitán– hasta la actualidad ha tenido un factor común: el territorio. Esta condición fundamental para el análisis de la génesis y evolución del conflicto hace necesaria la inclusión de la variable espacial. En relación con el tema del paramilitarismo, este trabajo propone un acercamiento al fenómeno a partir de tres conceptos fundamentales del análisis socioespacial: la localización, distribución y evolución de los grupos paramilitares, los ataques a la población y los desplazamientos forzados. A su vez, se incorpora como unidad de análisis la escala departamental, la cual corresponde para el caso de esta investigación, a Antioquia y Córdoba; el tiempo de estudio para este caso corresponde del 2002 al 2008.

PALABRAS CLAVE: centros urbanos, conflicto, desplazamiento, paramilitarismo tierra, violencia

ABSTRACT

Violence in Colombia has been demarcated for more than half a century by the political struggle of the elites and power groups to gain and control lands. This is why the historical evolution of the conflict, from its beginnings, with the bipartisan struggle of The 40s –Starting with the death of Gaitán– that today it keeps having a common factor: The territory. This fundamental condition for the analysis of the genesis and evolution of the conflict makes necessary the inclusion of the spatial variable. Regarding paramilitarism, this paper proposes an approach to the phenomenon based on three fundamental concepts of sociospatial analysis: the location, distribution and evolution (Buzai 2010) of paramilitary groups, attacks on the population and forced displacement, including, at the same time, the incorporation a departmental scale is placed as a unit of analysis, which corresponds to the case of this investigation, to the department of Antioquia and Córdoba, the temporality selected for this case, corresponds to the years from 2002 to 2008. Also, the variable “urban centers” shows how the paramilitary conflict has transformed the strategy of control of rural areas to the control of urban centers.

KEY WORDS: violence, paramilitarism, conflict, land, displacement, urban centers

RESUMO

Há mais de meio século, a violência na Colômbia é marcada pela luta política das elites e dos grupos de poder para apropriar e controlar a terra. É por isso que a evolução histórica do conflito, desde seus inícios, com a luta bipartidária los años 40 –começando com a morte de Gaitán– até hoje, teve um fator comum: o território. Essa condição fundamental para a análise da gênese e da evolução do conflito torna necessária a inclusão da variável espacial. Em relação à questão do paramilitarismo, este trabalho propõe uma abordagem do fenômeno com base em três conceitos fundamentais de análise socioespacial: localização, distribuição e evolução de grupos paramilitares, ataques à população e deslocamento forçado. Por sua vez, a escala estado é incorporada como uma unidade de análise, que corresponde ao caso desta pesquisa, aos estados de Antioquia e Córdoba, a temporalidade selecionada para este caso se refere aos anos de 2002 a 2008. Além disso, a variável centros urbanos; para mostrar como o conflito paramilitar transformou a estratégia de controle das áreas rurais e atualmente é redirecionada para o controle de centros urbanos.

PALAVRAS CHAVE: centros urbanos, conflito, deslocamento, paramilitarismo, terra, violência.

El Paramilitarismo lleva a crear una zona gris o indefinida que impide percibir dónde termina lo militar y dónde comienza lo civil. Tal ambigüedad es el corazón de la estrategia, pues permite el engaño y el camuflaje de lo oficial en privado y de lo privado en oficial, de modo que acciones impresentables de lo oficial puedan esconderse bajo mantos “privados” y que las acciones no oficiales usufructúen la autoridad oficial en el momento de doblegar a las víctimas.

JAVIER GIRALDO, *Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos.*

INTRODUCCIÓN

El presente estudio se encuentra sustentado en la necesidad de contribuir a la comprensión holística del fenómeno paramilitar en Colombia. Su principal aporte consiste en incorporar la variable espacial y la variable de los *centros urbanos* al análisis del fenómeno. Metodológicamente, esta investigación se fundamenta en los métodos de análisis socioespacial cuya selección se da en virtud de sus ventajas para vincular el territorio como un factor importante en la investigación social. En la actualidad, un número creciente de investigaciones sociales, además de teorizar y explicar conceptualmente un fenómeno o realidad, ha incluido a sus análisis de campo dimensiones tales como la ubicación, localización e interacción espacial (Goodchild, Anselin, Appelbaum, y Harthorn, 2000, p. 140). A partir de lo anterior, esta investigación selecciona el método socioespacial como la herramienta más idónea para

demostrar que el fenómeno paramilitar, adicional a tener fuertes implicaciones de carácter social, también presenta un marcado patrón de control territorial. Para ello, se articulan dos tipos de variables: 1) de tipo social, fuertemente ligada al fenómeno de la violencia paramilitar, representada en los ataques violentos, el desplazamiento y la presencia de grupos paramilitares, y 2) la variable de *centros urbanos*; esta última se define a partir de la Ley 388 de 1997, la cual estipula a partir del número de población, cuándo los distritos y municipios deben incorporar un plan de ordenamiento territorial. Para esto, se definen tres clases de planes:

1. Plan de ordenamiento territorial para distritos y municipios con población superior a 100.000 habitantes. Para el caso de esta investigación supondrá el criterio para determinar que un municipio se considere un centro urbano.
2. Planes básicos de ordenamiento territorial para distritos y municipios con población entre 30.000 y 100.000. Para este estudio determinará los municipios considerados en tránsito a centros urbanos.
3. Esquema de ordenamiento territorial para distritos y municipios con población inferior a 30.000, que corresponde a las zonas rurales.

La variable *centros urbanos* se ha incorporado con la finalidad de contraponerla a la historia de la violencia y su análisis tradicional, en el cual se señala que las áreas rurales han sido las más impactadas por el conflicto, debido primordialmente al origen histórico de la violencia armada en Colombia: la lucha por la tierra:

Hay una gran convergencia entre los historiadores en ubicar los comienzos del conflicto armado que aún afecta a Colombia, en las décadas de 1920 a 1960, con una intensificación entre los años 40 [...] y los 50 [...] hasta desembocar en 1964 en la conformación de las FARC, el ELN y el EPL. Las expresiones de lucha armada de ese periodo se ubican en zonas rurales de varios departamentos y tienen como principal protagonista a la población campesina. A juzgar por los análisis de los historiadores, el acceso a la tierra es el detonante principal (Giraldo, 2015, p. 10).

La inclusión de la variable *centros urbanos* en esta investigación permite ver a través de los métodos de análisis socioespaciales cómo el conflicto armado ha ido mutando y se ha redireccionado el control territorial hacia los principales centros urbanos, como los casos de Medellín en Antioquia y Montería, en Córdoba. Un segundo grupo de variables corresponde a las relacionadas con el análisis socioespacial de la localización, la distribución y la evolución (Buzai, 2010). Para el caso del estudio corresponden a la localización de los grupos paramilitares en Antioquia y Córdoba, cómo estos se encuentran distribuidos en el territorio y cuál ha sido la evolución de los ataques y desplazamientos del 2002 al 2008. Con el fin de consolidar la información correspondiente a las variables de análisis, se usaron fuentes de información de carácter secundario, provenientes de instituciones del Estado y organizaciones independientes, tales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Para responder cuál ha sido la localización, distribución y evolución de los grupos paramilitares en Antioquia y Córdoba del 2002 al 2008, se construyeron tres indicadores de análisis:

1. Número de ataques (desapariciones, asesinatos, tomas de territorios, violaciones, secuestros, masacres) en Córdoba y Antioquia del 2002 al 2008.
2. Número de desplazamientos (individuales o colectivos) del 2002 al 2008 en los departamentos estudiados.
3. Presencia de los grupos paramilitares (número de grupos o clanes) del 2002 al 2008 en Antioquia y Córdoba.

Esto se hace con el fin de determinar cuántos ataques y desplazamientos fueron atribuidos a grupos paramilitares y en qué lugares del departamento (área rural/ urbana) se localizaron durante este periodo. En la misma dirección, se focalizaron los municipios donde se concentró el mayor número de ataques y desplazamientos durante los años analizados, y se contrastó esto con los municipios donde se evidenció la mayor presencia de grupos paramilitares. Por último, como complemento del análisis, se define

si las áreas con mayor concentración de ataques, desplazamientos y grupos paramilitares corresponden a los municipios ubicados en áreas rurales o centros urbanos en el marco de lo propuesto por la Ley 388 de 1997.

En relación con lo anterior, la investigación propone como hipótesis que, si bien del 2002 al 2008 ocurrieron dos hechos de especial importancia en la reducción de los efectos del paramilitarismo en el territorio nacional –el desarme paramilitar (López, 2013) y la política de seguridad democrática (Cárdenas y Villa 2012– en los casos de Córdoba y Antioquia no solo aumentó la presencia de grupos paramilitares, sino que, a su vez, se desplazó el control territorial desde las áreas rurales hacia las áreas urbanas.

La selección de las unidades de análisis espacial (*departamentos*) se sustentó a partir de los informes presentados por Indepaz, especialmente el de seguimiento a los grupos paramilitares y su distribución en territorio colombiano. En dicho informe se destaca que, para el caso de Antioquia existe una distribución amplia del control territorial, a partir de la presencia de grupos paramilitares en 70 municipios, repartidos en los siguientes grupos: los Urabeños, los Rastrojos, la Oficina de Envigado, el Clan Úsuga y los paramilitares. Estos grupos se reparten el control de los municipios como se presenta a continuación: los Urabeños tienen 63 municipios; los Rastrojos, 17 municipios; la Oficina de Envigado, seis municipios; el Clan Úsuga, tres municipios, y los paramilitares, tres municipios. Lo anterior ubica a Antioquia como uno de los mayormente afectador por la presencia paramilitar, teniendo intervenido el 55,6% de su territorio (Indepaz, 2006).

Para el caso de Córdoba, su escogencia se basa en tres fuentes de información secundarias que determinan lo siguiente. A partir de 1993, en Córdoba se origina la segunda oleada de los grupos paramilitares, encabezados por los hermanos Castaño (Patiño, 2003, p. 80). El quinto informe de Indepaz (2010) señala que Córdoba desde el 2008 hasta el 2010 es el departamento con mayor afectación de grupos paramilitares en su territorio. La tercera fuente que justifica la escogencia de Córdoba para el análisis es el décimo informe de Indepaz (2015) sobre el seguimiento a la presencia de los grupos paramilitares en los departamentos de Colombia. En este se señala que de los 30 municipios de Córdoba, en 28 de ellos hay presencia paramilitar.

El contexto temporal seleccionado para el análisis de los efectos socioespaciales del fenómeno paramilitar en estos departamentos se determina a partir de dos marcos temporales: 1) el periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y la implementación de su política de seguridad democrática, que, desde las fuentes oficiales, masificó la idea de que a través del combate directo y armado a los grupos al margen de la ley (la guerrilla de las FARC y los paramilitares) se contribuía a la disminución de la inseguridad y la violencia en el país, y 2) al periodo de duración del proceso de desmovilización de las AUC (2002-2008).

A continuación se visualiza la figura 1, en la cual se indica el número de presencia paramilitar en el ámbito nacional, identificando claramente en la distribución departamental de Colombia que Antioquia y Córdoba cuentan con el mayor número de paramilitares, lo que se representa con los colores más oscuros dentro de la representación gráfica.

Genealogía: la violencia bipartidista en Colombia

El conflicto colombiano ha sido heterogéneo tanto a lo largo del tiempo como en la extensión del territorio. Así mismo lo han sido sus actores, sus víctimas y sus repertorios violentos. Superar este proceso pasa por preguntarnos por los contextos en que el conflicto surgió, por los motivos de sus cambios a través de la historia y por las razones de su prolongada permanencia; hecho que convierte a Colombia en el país con el conflicto sin negociar más antiguo del mundo.

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA, *Basta ya.*

Analizar la génesis del conflicto armado en Colombia supone indagar más allá del momento histórico en que surge la conformación de grupos armados al margen de la ley, primordialmente porque en Colombia los orígenes de la guerra no se limitan a divergencias entre la sociedad y el Estado, sino que las confrontaciones de origen han estado ligadas –desde el grito de independencia– al control político e ideológico, y a la lucha por la tierra. Sin embargo, existe un acuerdo entre historiadores

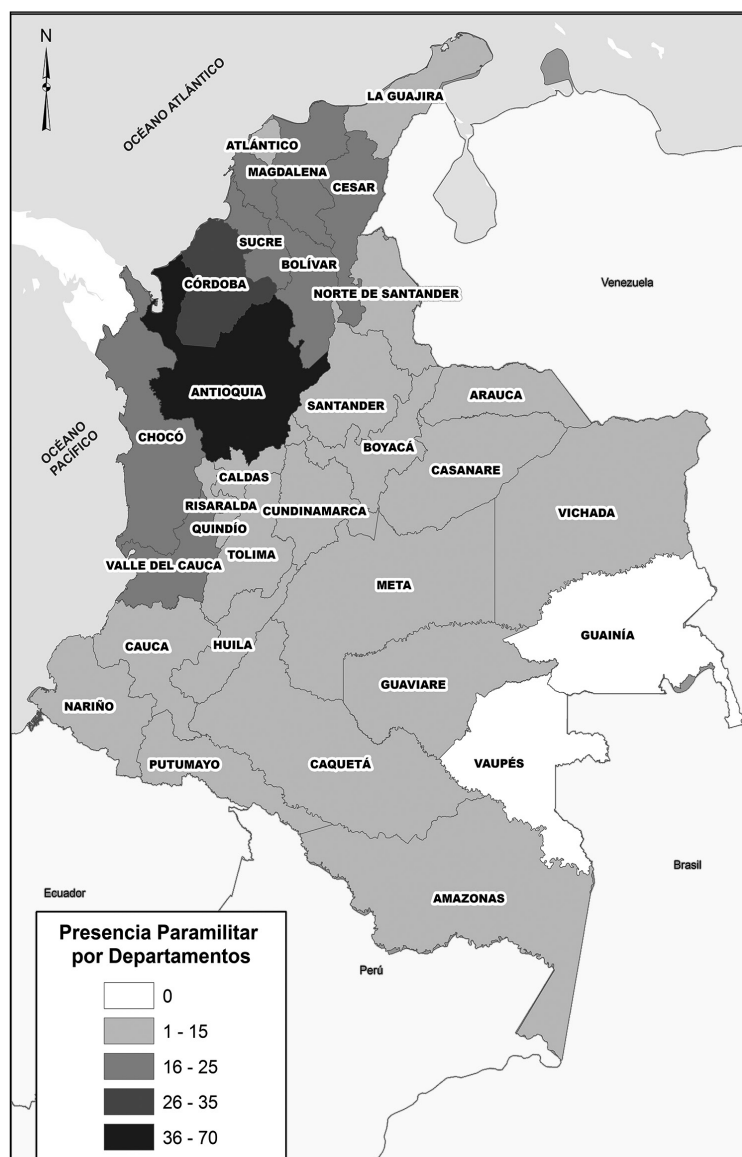


Figura 1. Presencia paramilitar en Antioquia y Córdoba.

Fuente: elaboración propia con base en Indepaz (2010, 2011, 2013, 2014).

e investigadores en señalar como origen del conflicto las luchas bipartidistas de los años 40.

El bipartidismo en Colombia tiene sus orígenes en el periodo posterior a la independencia del gobierno español y se encuentra fuertemente ligado a la idea de consolidar ideológicamente la nación. Esta consolidación incluía a las élites criollas y desplazaba

a los grupos de indígenas, mestizos y esclavos (Holguín, 2014) –recordemos que en el país desde sus orígenes las élites locales tuvieron una fuerte influencia en las decisiones políticas; esto incluyó las luchas independentistas–. La división ideológica entre las élites criollas (bolivaristas y santanderistas) trajo consigo una fuerte crisis económica y cuatro guerras civiles (1876-77, 1885-86, 1895 y 1899-1902), que azotaron al país y dejaron cada vez más sentimientos de odio y venganza entre los militantes de cada grupo. En este escenario surgen los dos partidos políticos tradicionales: liberales y conservadores; sin embargo, solo hasta los años 30 del siglo xx, cuando este conflicto permeó ampliamente a diversos grupos sociales, e incluyó a las clases populares, las cuales se adscribieron a la militancia partidista, la división entre liberales y conservadores estuvo fuertemente marcada por los intereses de cada partido (Tirado, 1978). Estas divergencias políticas fueron cruciales a la hora de marcar las diferencias entre cada partido; a medida que se vinculaban las clases populares, se acrecentaban las separaciones, al punto que se transformaba la militancia desde lo político hasta permear íntimamente la vida de los individuos. Con respecto a este aspecto Rehm señala que

La militancia en los partidos tradicionales no solo fue de suma importancia para el campo político colombiano de mediados del siglo xx, sino que llegó a tener una gran influencia sobre la identidad personal de los militantes. Hasta cierto punto, la identificación con uno de los dos partidos tradicionales reemplazaba al carente desarrollo de una identidad nacional que fuera más incluyente y que estuviera por encima de las militancias partidistas (Rehm, 2014, p. 19).

En este escenario de polarización, los historiadores del conflicto señalan los años 40 como la etapa determinante para la consolidación de la violencia bipartidista. Este periodo, que va desde 1946 hasta 1958, es conocido como “La Violencia” (Centro de Memoria Histórica, 2013, p. 112). Si bien las diferencias entre cada partido promovían cada vez con mayor ahínco el enfrentamiento entre dirigentes y militantes, fue la participación de aparato estatal y las fuertes represiones a los movimientos agrarios, obreros y populares urbanos, lo que disparó la violencia (Centro de Memoria

Histórica, 2013, p. 112), esto sin contar con las fuertes oleadas de violencia rural y urbana tras la muerte del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, en lo que se conoce como el *gaitanazo* (9 de abril de 1948)¹. La violencia bipartidista, sin embargo, escondió en el fondo intereses de los conservadores por la tenencia de la tierra: “la violencia había sido desatada por el gobierno conservador contra el liberalismo, pero que había tenido un sub-fondo: la lucha por la tierra” (Giraldo, 2015, p. 15).

Según datos del Centro de Memoria Histórica, en Colombia la violencia bipartidista generó una fuerte oleada de crímenes en la ciudad y el campo –cabe destacar la fuerte destrucción de la ciudad tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán–, y crímenes cometidos por las organizaciones armadas de liberales y conservadores Chulavitas y Pájaros, entre los que se encuentran sexuales, despojo de bienes, descuartizamientos, exhibiciones de cabezas cortadas, dispersión de partes del cuerpo por caminos rurales (Centro de Memoria Histórica, 2013, p. 112). El sello característico de este periodo fue la sevicia con la cual se llevaban a cabo los hechos violentos para castigar al enemigo y sembrar terror en la población.



Figura 2. El Cristo campesino, fotografía emblemática de la violencia entre liberales y conservadores en el periodo comprendido entre 1946 a 1953

Fuente: Centro de Memoria Histórica, (2013).

¹ Para ampliar información en relación con las memorias de la violencia en Colombia, véase Centro de Memoria Histórica (2013).



Figura 3. Campesinos liberales hombres y mujeres exhibidos en línea como trofeos de guerra.
Fuente: Centro de Memoria Histórica, (2013).

Según el Centro de Memoria Histórica, los datos más esclarecedores del impacto de la violencia bipartidista en Colombia, los entrega el informe de la Secretaria de Agricultura del Tolima para 1959 (tabla 1):

TIPO DE ATAQUE	CANTIDAD ESTIMADA
Muerte	166.219
Exilio	321.621
Propiedades abandonadas de forma transitoria o permanente	40.176
Casas quemadas o destruidas	34.304
Afectaciones económicas	Propietarios rurales 33,8% Jornaleros 28,17% Población dedicada a oficios domésticos 15,49%

Tabla 1. Consecuencias estimables de la violencia bipartidista en Colombia
Fuente: Centro de Memoria Histórica, (2013).

1982-2012. Expansión, crecimiento, recrudescimiento y reacomodo del conflicto armado: el terror paramilitar

Un acercamiento al fenómeno de la violencia en Colombia y su historia puede abordarse metodológicamente a partir de la clasificación de periodos de violencia. Esta metodología es utilizada por diversos historiadores que compilan hechos, momentos y actores clave del conflicto armado y los agrupan por periodos. La presente investigación ha seleccionado cuatro periodos que representan la evolución del conflicto armado en Colombia; estos periodos han sido extraídos del informe *¡Basta ya!* del Centro de Memoria Histórica:

1. 1958-1982: “De la violencia bipartidista a la violencia subversiva, surgimiento de las guerrillas, la movilización social y la marginalidad del conflicto armado” (Centro de Memoria Histórica, 2013, p. 111).
2. 1982-1996:

Proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la guerra fría junto con el posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos (Centro de Memoria Histórica, 2013, p. 111).

3. 1996-2005: “Recrudescimiento del conflicto armado, expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado” (Centro de Memoria Histórica, 2013, p. 111).
4. 2005-2012:

Reacomodo del conflicto armado, se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en

la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado (Centro de Memoria Histórica, 2013, p. 111).

Para efectos de la presente investigación y teniendo en cuenta la temporalidad definida para abordar el fenómeno del paramilitarismo en Antioquia, se trabajará con dos de los periodos propuestos por el Centro de Memoria Histórica: de 1996 al 2005, y el periodo de reacomodo del conflicto, que va del 2005 al 2012 –hay que mencionar que la investigación se limitará al análisis del periodo del 2002 al 2008–.

Génesis del paramilitarismo en Colombia

El origen formal del paramilitarismo en Colombia puede situarse a finales de los años 60 (Rivas y Rey, 2008), a partir del marco legal que permitía la creación de grupos civiles destinados a la defensa, Ley 48 de 1968/ Decreto 3398 de 1965 (Rivas y Rey, 2008, p. 44); estas organizaciones de defensa civil estaban destinadas a la protección –debido a la incapacidad manifiesta del Estado para la resolución de problemas sociales y el mantenimiento del orden público (Rivas y Rey, 2008, 44)– de los terratenientes y finqueros, y, en menor medida, de la población rural, a propósito del fortalecimiento y avance de las guerrillas, especialmente de las FARC y el ELN, las cuales ampliaron su estrategia de expansión desde finales de los 60, dirigiéndose primordialmente a zonas rurales (Giraldo, 2015, p. 17).

Estas organizaciones, si bien en una primera instancia surgen para brindar protección, modificaron paulatinamente su estrategia y se transformaron en organizaciones de carácter ilícito, que más que prevenir buscaban atacar (Rivas y Rey, 2008, p. 44). En este escenario jugaron un papel preponderante varios tipos de actores:

1) los terratenientes; 2) los militares; 3) los campesinos, y 4) los narcotraficantes; cada uno de ellos con un interés particular. Sin embargo, en un punto en particular, los militares y las élites regionales se asociaron con el propósito de financiar la guerra contra las FARC, dado que el Gobierno no contaba con gran cantidad de recursos económicos y parte de los esfuerzos se estaban destinando a la consolidación del proceso de paz con las FARC –en el marco del gobierno Betancur en 1984– (Centro de Memoria Histórica, 2013, pp. 134-136).

Narcotráfico y paramilitarismo

Un factor crucial para el auge del paramilitarismo y el recrudecimiento de la guerra en Colombia –a propósito de la incorporación de tácticas sanguinarias de ataque, dirigidas mayoritariamente a la población civil– fue el vínculo entre paramilitares y narcotraficantes. Los años 80 marcan el inicio de esta asociación:

Es preciso destacar que, si bien esta alianza fue marcadamente contrainsurgente, hacia mediados de los años ochenta, en su doble papel de élites emergentes y empresarios ilegales, los narcotraficantes irrigaron recursos económicos a todos los actores del conflicto armado. Las organizaciones del narcotráfico instrumentalizaron a los actores armados y sus disputas en función de la actividad ilícita, pero también entraron en confrontaciones con estos por el dominio de los recursos y los territorios (Centro de Memoria Histórica, 2013, p. 143).

La entrada en escena del narcotráfico fortaleció económicamente las organizaciones paramilitares y a su vez las dotó de armamento; esto contribuyó a su rápida expansión en el territorio y aumentó los índices de desplazamiento forzado, masacres y despojos de tierra (Giraldo, 2015, p. 18). A este contexto se le denomina *narcoparamilitarismo*, en el cual se encuentran vinculados los grandes grupos de poder económico en el país, la clase política, los narcotraficantes y el Estado, especialmente en las regiones de Antioquia, Catatumbo, Córdoba, Chocó y el Magdalena Medio, que

han sido los territorios más golpeados por las masacres y el desalojo de tierras, estrategia que ha continuado hasta los años 2000, tal como lo destaca Alfredo Molano: “el terror paramilitar activó el mercado de tierras con énfasis en la oferta de fincas a bajos precios, cuando no la mera sustitución del poseedor o la venta coactiva” (Molano, 2013, p. 51).

Con el pretexto de combatir a las guerrillas, el paramilitarismo extendió una fuerte ola de terror, expulsando pobladores con amenazas; robando tierras; asesinando a la población, civil y dejando territorios convertidos en pueblos fantasma al asesinar brutalmente a un gran número de pobladores, en lo que podrían llamarse “exhibiciones de sevicia”, tal como el caso de los montes de María y la masacre del Salado (Centro de Memoria Histórica, 2013, p. 135-140).



Figura 4. La danza de la muerte paramilitar en El Salado.

Fuente: Eduardo Herrán.

Desmovilización de las AUC

A partir del 2002 inicia el proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares en Colombia, en el marco del primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Este proceso inició con la iniciativa pública del presidente de las AUC para iniciar los diálogos con el Gobierno; no obstante, solo es hasta el 2003, en Tierralta, Córdoba, cuando inician las primeras reuniones entre miembros del alto comisionado para la paz, miembros de la iglesia

y representantes de las AUC. Los hechos más importantes de este proceso son los siguientes (figura 5):

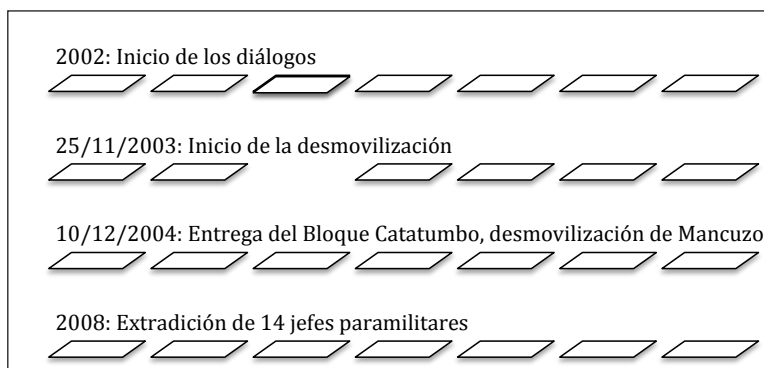


Figura 5. Línea de tiempo del proceso de desmovilización de las AUC.

Fuente: Centro de Memoria Histórica (2014).

El caso del paramilitarismo en Antioquia

Según diversas fuentes, investigadores del conflicto, organizaciones como Indepaz y el Centro de Memoria Histórica, a inicios de la segunda década de los años 2000 se inició un proceso de recomposición de las estructuras armadas del narcoparamilitarismo. A este reordenamiento de la estructura ilegal se le ha conocido con el nombre de Bacrim. Las Bacrim conformaron diversos bloques a inicios del 2008 según indica el *VIII informe sobre grupos narcoparamilitares* de Indepaz. Las estructuras neoparamilitares se encontraban repartidas de la siguiente forma (tabla 2):

COMPARATIVO DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE GRUPOS NARCOPARAMILITARES 2008-2012.					
Año	2008	2009	2010	2011	2012
Departamentos	31	30	32	31	31
Municipios	259	278	360	406	409

Tabla 2. Presencia de grupos narcoparamilitares desde el 2008 hasta el 2012

Fuente: Indepaz (2013).

Antioquia ha sido el más afectado, debido a que gran parte de su territorio (55,6%) se encuentra controlado por grupos

neoparamilitares, entre los cuales se encuentran los Urabeños, los Rastrojos, la Oficina de Envigado, el Clan Úsuga y los paras. Los datos presentados por los informes de Indepaz para Antioquia son los siguientes:

DEPARTAMENTO	NÚMERO DE MUNICIPIOS
Antioquia	65
Arauca	3
Atlántico	10
Bolívar	24
Boyacá	4
Caldas	9
Caquetá	3
Casanare	9
Cauca	19
Cesar	23
Chocó	28
Córdoba	25
Cundinamarca	6
Distrito Capital	1
Guainía	1
Guaviare	3
Huila	2
La Guajira	8
Magdalena	15
Meta	19
Nariño	26
Norte de Santander	16
Putumayo	4
Quindío	7
Risaralda	5
San Andrés y Providencia	1
Santander	7
Sucre	19

Tolima	12
Valle	32
Vichada	3
TOTAL	409

Tabla 3. Presencia de grupos paramilitares por departamento en el 2012.

Fuente: Indepaz (2013).

DEPTO.	Total MPIO.	Número de municipios con actividad paramilitar					Afectación				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
Chocó	30	9	7	16	19	28	43	47	70	63	93
Cesar	25	15	14	21	23	23	60	56	76	92	92
Córdoba	28	15	21	23	24	25	54	75	82	85	89
Valle	42	16	20	20	26	32	38	48	50	61	76
Sucre	29	9	7	16	17	19	34	27	61	65	73
Meta	45	12	13	16	20	19	41	45	55	68	65
Bolívar	125	11	7	23	34	24	24	16	51	75	53
Antioquia	30	48	40	64	71	65	38	32	51	57	52
Magdalena	41	8	7	13	15	15	27	23	43	50	50
Cauca	23	10	17	17	14	19	24	41	41	31	46
Atlántico	64	3	2	8	12	10	13	9	35	52	43
Nariño		13	18	24	28	26	10	28	37	43	40
Norte de Santander	41	9	6	16	19	16	22	15	40	46	39

Tabla 4. Departamentos con mayor actividad paramilitar.

Comparativa del periodo 2008-2012.

Fuente: Indepaz (2013).

La anterior información, a pesar de ser detallada y mostrar el impacto de los grupos neoparamilitares en el territorio, no expone la relevancia espacial de este control territorial, que en determinados territorios ha manifestado un cambio de estrategia de dominio, pues ha pasado de las zonas rurales hacia el control de centros urbanos. Esto se ve en Medellín, Antioquia, que pasó a ocupar desde el 2010 el primer lugar en aumento de la tasa de homicidios (Indepaz, 2010):

Entre enero y junio se registraron 881 homicidios, un aumento de 54% respecto al mismo periodo de 2008, cuando sumaron 475, informó el director del Instituto local de Medicina Legal (forense), José Iván Gómez, a la AFP. La cifra esta incluso por encima de los 867 homicidios reportados en el mismo periodo en la mexicana Ciudad Juárez, escenario de una guerra del narcotráfico. Medellín, segunda ciudad colombiana con 2,3 millones de habitantes, sufre un incremento del crimen en los últimos tres años. En el primer semestre de 2007 se contabilizaron 365. “El fenómeno se debe principalmente al enfrentamiento entre la banda de ‘Don Mario’ y la ‘Oficina de Envigado’ “(organizaciones ‘narcoparamilitares’ que operan en esa ciudad)”, dijo Jorge Ceballos, personero de Medellín (defensor del pueblo), a la AFP (“Criminalidad azota Medellín”, 2016).

Existen varias hipótesis que confluyen a una tesis común: el neoparamilitarismo dirige su fuerza actualmente hacia una guerra urbana, especialmente por sus intereses, que se encuentran relacionados con la apropiación de recursos económicos y las rentas ilegales; el contrabando; las amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos; la cooptación de poderes locales y regionales, y los vínculos con las fuerzas armadas y el Estado. Estas actividades pueden dar cuenta del porqué los centros urbanos se convierten en un escenario predilecto para el control territorial del neoparamilitarismo.

Análisis metodológico del paramilitarismo en Antioquia

Para analizar el caso de Antioquia, se realizó un análisis espacial en el periodo 2002-2008, iniciando con una localización y representación cartográfica de los ataques violentos y el desplazamiento forzado que ocurrió en el periodo señalado; se continuó con un examen de la distribución espacial de estos eventos, y se finalizó con un estudio multitemporal, llamado *evolución espacial*, para determinar el flujo y comportamiento de cada una de estas variables en la zona de estudio. Todo este proceso estuvo apoyado

en el marco de la política de seguridad democrática implementada en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. El estudio tuvo el fin de demostrar cómo la estrategia de desplazamiento del control paramilitar hacia los centros urbanos ha venido evolucionando desde el 2002.

Hay que destacar que, de acuerdo al uso de la información cartográfica obtenida de fuentes secundarias, se procedió a identificar espacialmente los centros urbanos de este departamento, reconociendo a Medellín y Apartadó como los núcleos principales de desarrollo paramilitar, lo cual se puede visualizar en las figuras que se visualizan a continuación:

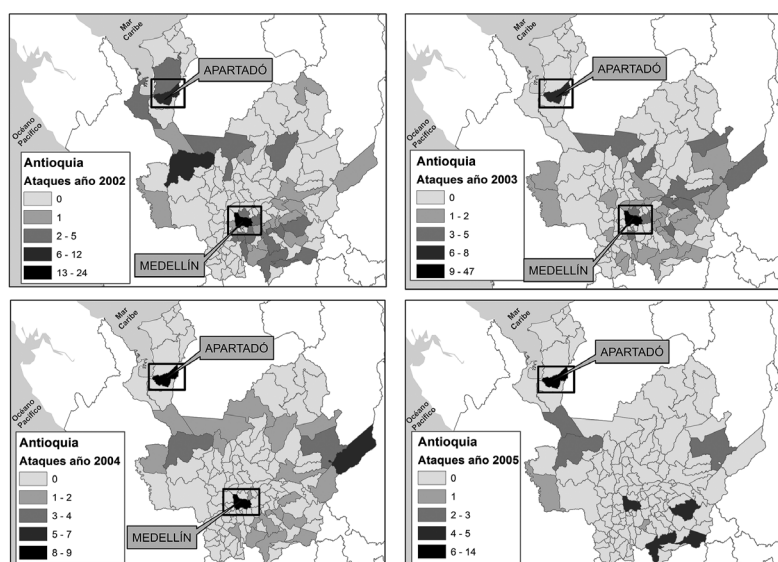


Figura 6. Análisis multitemporal de los ataques violentos en Antioquia durante los años 2002- 2005.

Fuente: elaboración propia con base en Indepaz (2010, 2011, 2013, 2014); Codhes (2016); DANE (2005); CINEP, base de datos Noche y Niebla.

La figura 6 representa el número de ataques perpetrados por parte de grupos paramilitares desde el 2002 al 2005, en el cual se evidencia un patrón de concentración de ataques en los municipios de Medellín y Apartadó

La figura 7 representa el número de ataques perpetrados por parte de grupos paramilitares desde el 2002 al 2005. Al igual que en la figura 6 se ve un patrón de concentración de los ataques paramilitares en Medellín y Apartadó.

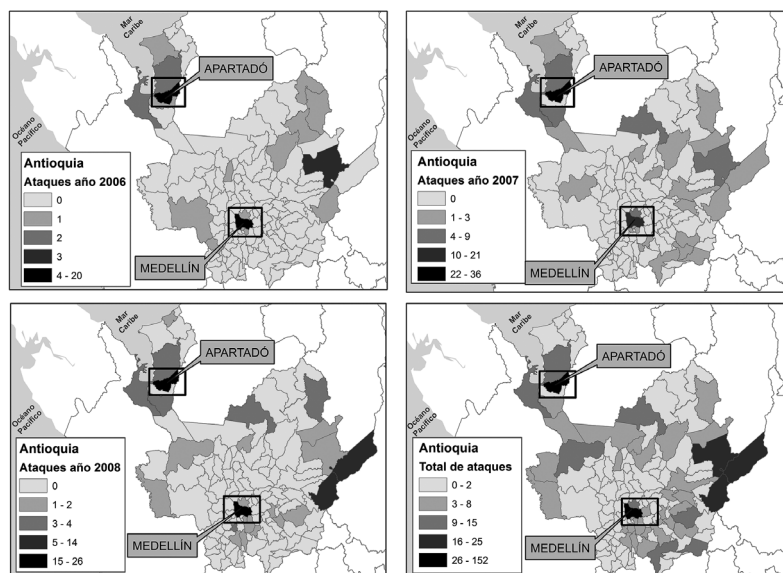


Figura 7. Análisis multitemporal de los ataques violentos en Antioquia durante 2006-2008 (total).

Fuente: elaboración propia con base en Indepaz (2010, 2011, 2013, 2014); Codhes (2016); DANE (2005); CINEP, base de datos Noche y Niebla.

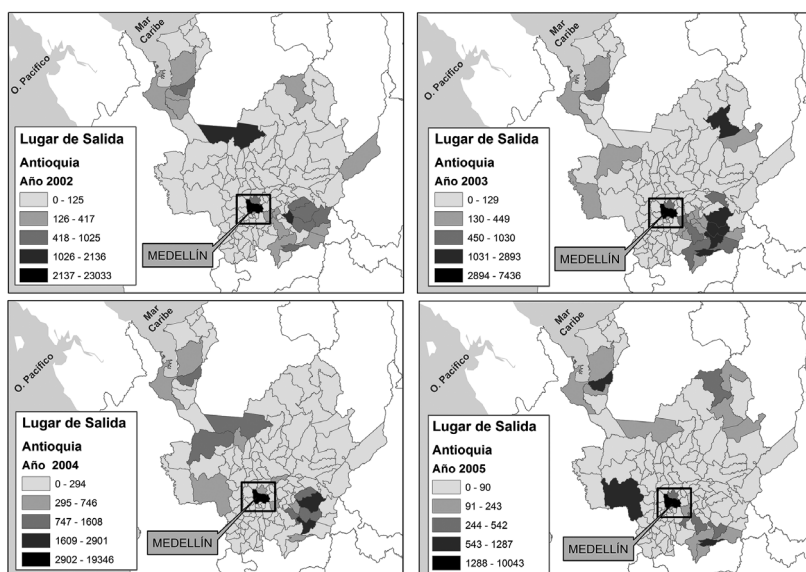


Figura 8. Análisis multitemporal de los desplazamientos forzados 2002-2005.

Fuente: elaboración propia con base en Indepaz (2010, 2011, 2013, 2014); Codhes (2016); DANE (2005); CINEP, base de datos Noche y Niebla.

La figura 8 muestra que durante el 2002 y el 2005, la población desplazada se concentró mayoritariamente en Medellín.

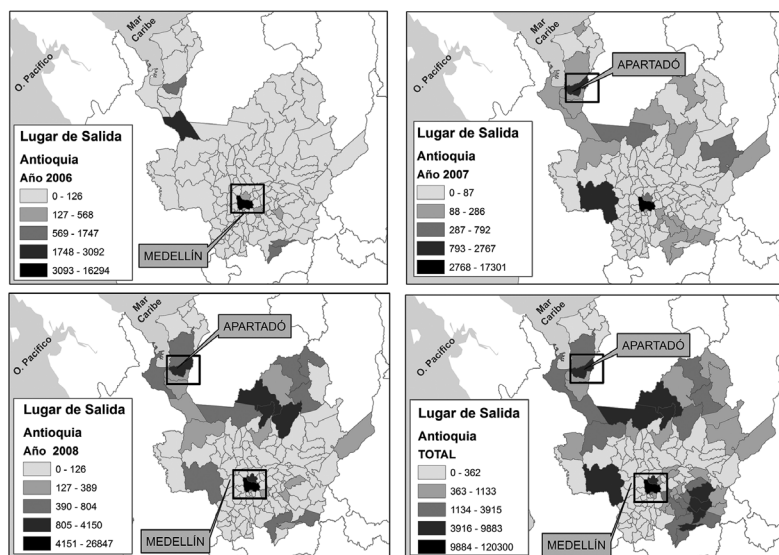


Figura 9. Análisis multitemporal de los desplazamientos forzados 2006-2008 (total).

Fuente: elaboración propia con base en Indepaz (2010, 2011, 2013, 2014); Codhes (2016); DANE (2005); CINEP, base de datos Noche y Niebla.

La figura 9 sobre la evolución de los desplazamientos por parte de los grupos paramilitares muestra que durante el 2006 y el 2008 los municipios que se vieron afectados por este flagelo fueron Apartadó y Medellín.

La figura 10 representa la triangulación de la variable *centros urbanos* con las variables *total de ataques* y *total de desplazamientos de los grupos paramilitares* durante el 2002 y el 2008 en Antioquia. La evidencia socioespacial ratifica la concentración del mayor número de ataques y el mayor número de desplazamiento en los centros urbanos del departamento, especialmente en Apartadó y Medellín, este último el más afectado.

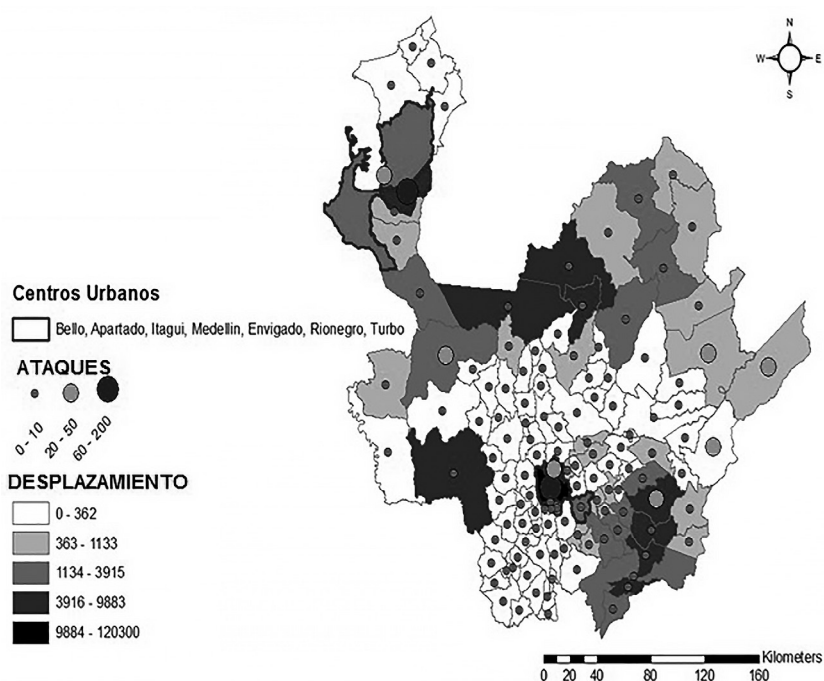


Figura 10. Ataques, desplazamientos totales y centros urbanos del departamento de Antioquia.

Fuente: elaboración propia con base en Indepaz (2010, 2011, 2013, 2014); Codhes (2016); DANE (2005); CINEP, base de datos Noche y Niebla.

El paramilitarismo en Córdoba

El origen del fenómeno del paramilitarismo en Córdoba se sitúa en el 1993 con los hermanos Castaño. A este fenómeno del paramilitarismo en Córdoba se le denomina *la segunda oleada del paramilitarismo* y condensa en su origen causas distintas a la lucha contrainsurgente con las FARC (Centro de Memoria Histórica, 2013, p. 145):

Sus orígenes se deben a la instauración de un modelo de *justicia privada* o de *limpieza social* llevada a cabo por Fidel Castaño que había amasado una importante fortuna procedente de negocios de venta de piedras preciosas, obras de arte y del narcotráfico. Con esta pequeña fortuna, invierte sus recursos en la compra de tierras cercanas a la sabana del río Sinú, colindante con la ciudad de Montería. El hecho social que permite la

conformación y creación de los grupos paramilitares en el departamento de Córdoba, obedecen al amedrentamiento de la cual son víctimas los ganaderos de la región por parte de grupos insurgente. Como medida de solución, se concertó el pago de dinero, para la protección de sus bienes y el aniquilamiento o neutralización de estos grupos. No obstante, la conformación de estos grupos paramilitares contarán con el apoyo del ejército (Patiño, 2003, p. 80).

Trabajos recientes desde la investigación histórica establecen que entre 1994 y 1995, bajo la comandancia de Carlos Castaño, los grupos paramilitares en Córdoba expandieron sus dominios más allá de los límites departamentales, posicionando su control territorial, en toda la parte norte del país (Centro de Memoria Histórica, 2013; Patiño, 2003). Su expansión territorial en toda la parte norte del país derivó en la consolidación de un gran ejército dispuesto para la guerra. Los paramilitares contaron entre sus filas con más de 12.000 hombres para el 2002 (Patiño, 2003) y 35.000, en el 2005 (Lair, s. f., p. 2). Su estrategia armada en Córdoba y en la zona norte del país se caracterizaría “por la cooptación política local y regional y por la posibilidad que tendrían mediante esta cooptación política, de influir en el Estado central para la legislación de sus intereses” (Centro de Memoria Histórica, 2013, p. 160).

Con la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2002, se inician las conversaciones para el proceso de desmovilización de las AUC en el ámbito nacional (2002-2005), denominado *el Pacto de Ralito*, cuyos acuerdos serían refrendados en la Ley 975, de Justicia y Paz, y culminarían con la extradición hacia Estados Unidos, de sus máximos cabecillas. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se lanza la ofensiva contrainsurgente más exitosa del Estado colombiano –la política de seguridad democrática– para combatir a los grupos guerrilleros de las FARC. En ella, se dispondría de todos los recursos (económicos, legales, sociales, etc.) posibles para acabar con los grupos guerrilleros de las FARC, mientras con las AUC se iniciaba un proceso de paz y desmovilización (Leal, 2006, p. 3). Esto supondría una disminución en el número de víctimas que ocasionaba las acciones de guerra perpetradas por los grupos paramilitares. Sin embargo, fue otro el escenario que se presentó:

A fines de 2002, los paramilitares habían prometido no atacar a la población civil, y a mediados de 2003 habían establecido un cese de hostilidades, promesa ratificada a final del año junto con el anuncio de perfeccionamiento de tal cese, el abandono del narcotráfico y la suspensión del secuestro y el robo de combustible. Pero los abusos continuaron, así como la indefinición del proceso. Hubo críticas ante la ambigüedad jurídica de las discusiones y la posibilidad de que éste caminara hacia la impunidad (Leal, 2006, p. 15).

Análisis metodológico del paramilitarismo en Córdoba

A partir de lo anterior, el presente trabajo presenta cuatro mapas sobre la localización de los ataques y desplazamientos en el periodo ya definido, el análisis de su distribución espacial y un estudio multitemporal de los hechos estudiados en este documento en Córdoba durante el 2002 y el 2008, esto con el fin de demostrar, a partir del análisis socioespacial, que los ataques de los grupos paramilitares se sostuvieron en el tiempo y, en gran medida, el fenómeno de desplazamientos forzados que afectaba directamente a la población civil presentó un crecimiento exponencial en el marco del proceso de paz con las AUC. Al mismo tiempo, el análisis socioespacial demostrará que la estrategia de guerra implementada por las AUC en Córdoba tenían concordancia con la causa del origen del conflicto armado en país –la lucha por la tierra–, pero que, a su vez, este se estaría modificando gradualmente hacia Montería, en aras de un mayor control territorial y político de los centros urbanos.

La figura 11 muestra que existe un patrón de concentración en Montería y Tierralta.

La figura 12 ratifica que el patrón de concentración de los ataques perpetrados por los grupos paramilitares en Córdoba durante el 2006 y el 2008 se mantuvo en Montería y Tierralta.

La figura 13 muestra que existe un patrón de concentración mayoritariamente en Montería y, en menor medida, en Tierralta.

La figura 14 muestra que se mantiene el patrón de concentración mayoritariamente en Montería y, en menor medida, en Tierralta.

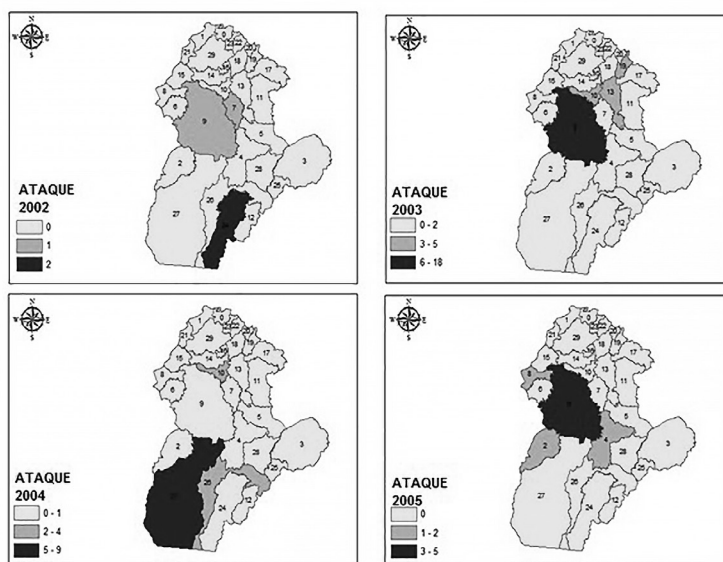


Figura 11. Evolución de los ataques violentos en el departamento de Córdoba durante el 2002 y el 2005.

Fuente: elaboración propia con base en Indepaz (2010, 2011, 2013, 2014); Codhes (2016); DANE (2005); CINEP, base de datos Noche y Niebla.

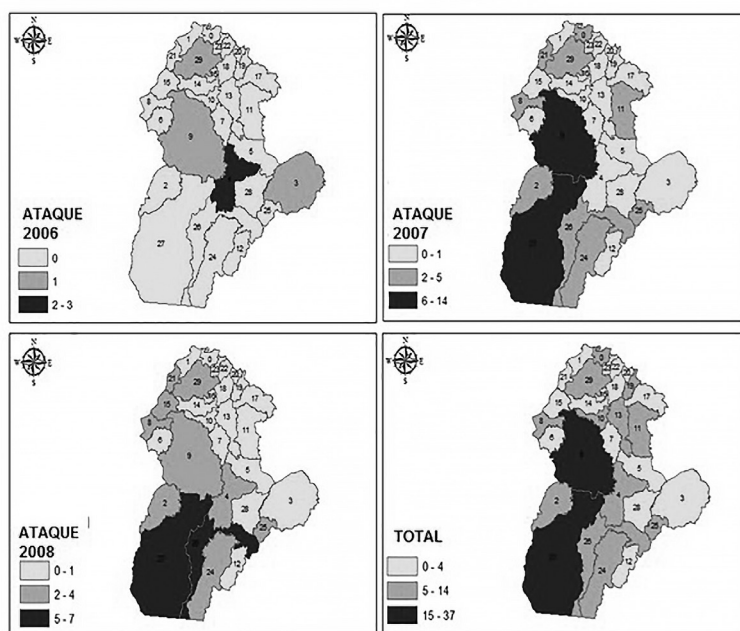


Figura 12. Evolución de los ataques violentos en Córdoba durante el 2006 y el 2008 (total).

Fuente: elaboración propia con base en Indepaz (2010, 2011, 2013, 2014); Codhes (2016); DANE (2005); CINEP, base de datos Noche y Niebla.

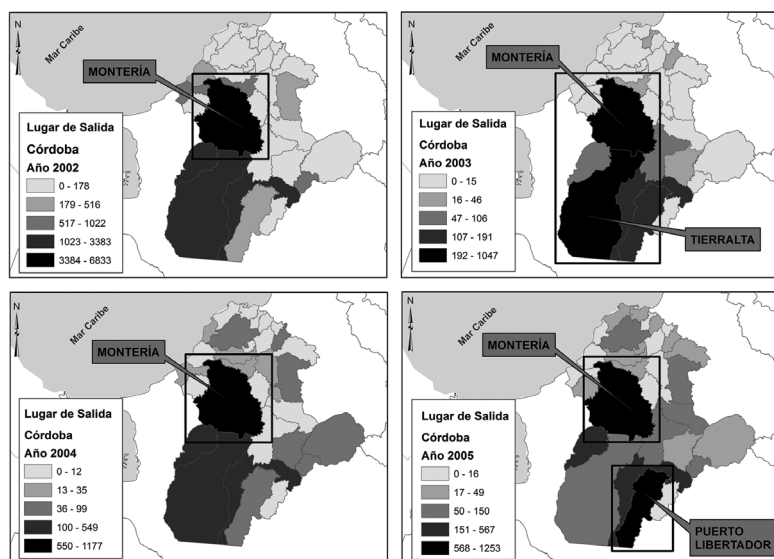


Figura 13. Análisis multitemporal de los desplazamientos forzados en Córdoba durante los años 2002 a 2005.

Fuente: elaboración propia con base en Indepaz (2010, 2011, 2013, 2014); Codhes (2016); DANE (2005); CINEP, base de datos Noche y Niebla

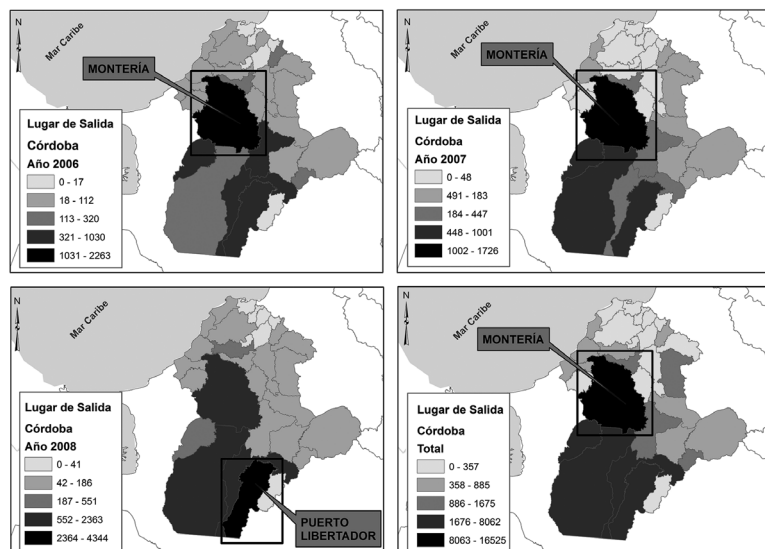


Figura 14. Evolución de los desplazamientos forzados en Córdoba durante el 2006 y el 2008 (total).

Fuente: elaboración propia con base en Indepaz (2010, 2011, 2013, 2014); Codhes (2016); DANE (2005); CINEP, base de datos Noche y Niebla.

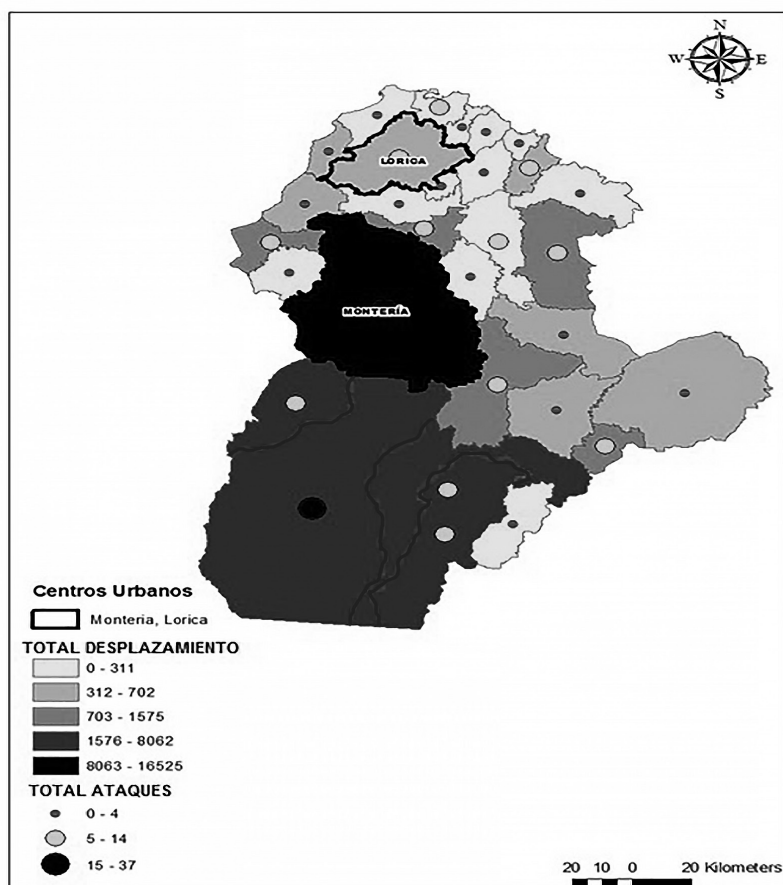


Figura 15. Ataques, desplazamientos totales y centros urbanos de Córdoba.

Fuente: elaboración propia con base en Indepaz (2010, 2011, 2013, 2014); Codhes (2016); DANE (2005); CINEP, base de datos Noche y Niebla.

La figura 15 representa la triangulación de la variable *centros urbanos* con las variables *total de ataques* y *total de desplazamientos de los grupos paramilitares* del 2002 al 2008 en Córdoba. La evidencia socioespacial ratifica la concentración del mayor número de ataques y el mayor número de desplazamientos en los centros urbanos del departamento, especialmente en Montería y Tierralta; el primero, el más afectado.

Conclusiones

A partir de la investigación a informes, bases de datos y fuentes de información relacionados con los efectos del fenómeno paramilitar, específicamente durante el periodo 2002-2008, se plantea una primera conclusión, que evidencia que el control territorial del fenómeno paramilitar se hace mayormente visible en los centros urbanos, esto en contraposición a la hipótesis tradicional, que señala que el conflicto armado se encuentra estrechamente vinculado a la lucha por la tierra *rural*. En este caso, se evidencia la conformación de una nueva estrategia de los grupos neoparamilitares, que redirige el control territorial hacia los centros urbanos. Esta afirmación se sustenta a partir del interés y de las actividades de estos grupos delictivos, más ligados al crimen organizado, la extorsión, la venta de drogas y la parapolítica.

A pesar de la persistencia del debate entre organizaciones y expertos sobre la naturaleza y alcance de estos grupos, las Bacrim se reconocen públicamente hoy, en un sentido amplio, como: 1) un fenómeno de crimen organizado representado por 2) organizaciones criminales construidas alrededor del narcotráfico y otras fuentes de financiación (legales e ilegales, como la minería, la microextorsión o el microtráfico), 3) desligadas teóricamente de las lógicas del conflicto armado en términos jurídicos y militares (no aplicación del derecho internacional humanitario), 4) de bajo perfil, *urbanas*, con estructuras en su mayoría no militares pero con capacidad para administrar territorios y ejercer amplio control social local, 5) con capacidad para hacer alianzas transitorias con grupos guerrilleros en el ámbito nacional y con carteles y redes criminales internacionales, 6) infiltrar instituciones y corromper miembros de la fuerza pública y funcionarios públicos, y 7) responsables de un número significativo de masacres, homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y reclutamiento forzado de menores, entre otros hechos delictivos (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 2016, p. 1-6).

Más específicamente, el análisis socioespacial arroja las siguientes conclusiones para el caso del Antioquia:

1. Del 2002 al 2008 Medellín y Apartadó concentraron el mayor número de ataques por parte de los grupos

paramilitares; esto indica que en estos municipios existió una fuerte presencia paramilitar, la cual se mantuvo luego del proceso de desmovilización de las AUC.

2. Los años 2003, 2007 y 2008 corresponden a los años con mayor número de ataques en Antioquia. Para el caso de Medellín el patrón de ataques se mantuvo constante durante del 2002 al 2008, mientras que para Apartadó los ataques se intensificaron a partir del 2003, y es a partir de este año que se mantienen constantes los niveles de violencia en la zona.
3. Respecto a los desplazamientos forzados, Medellín tiene el mayor número de desplazamientos en el departamento. Para el caso de Apartadó se presentan variaciones en cuanto al número de desplazamientos del 2002 al 2008; el número de desplazamientos no supone un alto porcentaje en comparación con el caso de Medellín y otros municipios rurales.
4. Antioquia cuenta con siete centros urbanos: Apartadó, Medellín, Itagüí, Bello, Envigado, Rionegro y Turbo; sin embargo, los dos centros urbanos con mayor concentración de ataques violentos y desplazamiento forzado por parte de grupos paramilitares durante el 2002 y el 2008 son Medellín y Apartadó.
5. Para el caso de Medellín y al ser considerado uno de los centros urbanos más importantes del país, el análisis socioespacial del 2002 al 2008 lo señala como foco de control territorial por parte del paramilitarismo, especialmente en relación con el número de ataques violentos y desplazamientos forzados. Por esto no sorprende que en la actualidad Medellín se encuentre fuertemente azotada por el crimen organizado, que reemplazó las estructuras paramilitares tras la desmovilización de las AUC:

Según un estudio realizado por las universidades de Antioquia y Eafit, anualmente la renta criminal por hurto en Medellín asciende a cerca 49 mil millones de pesos. Además, se evidenció que los habitantes de la ciudad pagan aproximadamente 10 mil millones de pesos por extorsiones al año. Las cifras indican que la economía criminal de Medellín recibe en promedio 58

mil millones de pesos anuales, solo por los delitos de hurto y extorsión (RCN radio, 2015).

El análisis socioespacial arroja las siguientes conclusiones para Córdoba:

1. Los años con más ataques perpetrados por los grupos paramilitares en Córdoba fueron el 2003, el 2007 y el 2008, según el mapa de ataques. Se muestra un patrón incipiente en el cual los ataques a lo largo del periodo del 2002 al 2008 se concentraron en los municipios de Montería y Tierralta.
2. En el caso de los desplazamientos forzados debido a los ataques por parte de los paramilitares se observa un patrón marcado de afectación directa en Montería y en menor medida en Tierralta. A su vez, los años con mayor número de desplazamientos forzados fue el periodo 2002-2008, siendo el del 2002, el de mayor intensidad.
3. Solo existen dos municipios en el rango de más de 100.000 habitantes según la Ley 388 de 1997, los cuales son Montería y Lorica.
4. Entre el 2002 y el 2008 el total de ataques y desplazamientos forzados en Córdoba arrojaron un patrón de concentración en una ciudad principal (Montería) y en un área semiurbana rural (Tierralta).

Los resultados obtenidos mediante el análisis socioespacial de ambos departamentos adquieren mayor relevancia y validez cuando, mediante una revisión del trabajo denominado “Balance político de la parapolítica”, este determina, según fuente de la Fiscalía General de la Nación, que para el caso de Córdoba, se encuentran procesados por parapolítica: ocho alcaldes, cinco excongresistas y tres funcionarios públicos, para un total de 16. En el caso de Antioquia se encuentran procesados por parapolítica: nueve alcaldes, dos exalcaldes, dos exconcejales, un gobernador, tres policías, seis militares, dos excongresistas, para un total de 25 funcionarios públicos (López y Sevillano, s. f., p. 9).

Al mismo tiempo, esta investigación advierte que, para el caso de Córdoba, la Fiscalía General de la Nación tiene actualmente 22

procesos abiertos por parapolítica, mientras que la corte suprema de justicia cuenta con 6^[2]. En el caso de Antioquia, la investigación señala que la Fiscalía General de la Nación tiene abiertos 20 procesos, mientras que la Corte Suprema de Justicia, seis procesos por el mismo fenómeno (López y Sevillano, s. f., p.10). Por lo que se señala, existe una relación latente entre política, paramilitarismo y centralidades urbanas, especialmente en relación con la generación de políticas públicas y a la cooptación de respaldos políticos para el ejercicio de actividades ilícitas vinculadas con el narcotráfico.

La evidencia empírica y los resultados del análisis socioespacial permiten validar la hipótesis propuesta por la investigación, muy a pesar de que el país estuvo en medio de un proceso de desarme de las AUC y que este se instauró con fuerza durante el periodo de gobierno del presidente Uribe Vélez mediante la política de la seguridad democrática, que en cifras oficiales significó la disminución de la inseguridad y la violencia en territorio Colombiano. No obstante, esto no tuvo efecto alguno en los municipios consolidados como centros urbanos en Córdoba y Antioquia, los cuales recibieron con mucha fuerza del 2002 al 2008 los efectos del fenómeno paramilitar principalmente, en términos de control territorial (presencia de grupos paramilitares), ataques violentos y desplazamiento forzado.

Así mismo, se plantea que, dada la inminente importancia de los centros urbanos en la construcción de una nueva estrategia de rearme y reacomodo del paramilitarismo en Colombia, los centros urbanos jugarán un papel crucial durante el posconflicto, debido a que nuevas estructuras de crimen organizado luchan por el control territorial de las ciudades con el fin de posicionarlas como espacios estratégicos para el control de la economía ilícita de las drogas y las armas. Es por esto que grandes ciudades, como Medellín, y ciudades intermedias, como el caso de Montería, desempeñan un papel determinante para el fortalecimiento del narcotráfico y el crimen organizado en Colombia. La pregunta que resulta ante este

2 Según este estudio, de las 70 curules que obtuvo la coalición uribista bajo su gobierno (2002-2010) 34 están involucradas en investigaciones por el fenómeno de la parapolítica. Esto demuestra que la política de seguridad democrática fue una estrategia institucionalizada por el Estado para hacer frente solo al grupo guerrillero de las FARC, mientras los grupos paramilitares seguían actuando en el territorio nacional colombiano, sin control alguno por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

panorama de reacomodo del conflicto neoparamilitar en centros urbanos es: ¿el Gobierno nacional y los alcaldes de todo el territorio nacional se encuentran preparados para asumir la seguridad de sus ciudades en el marco del posconflicto?; o ¿es probable que, dada la evidencia empírica y los numerosos procesos de parapolítica, las ciudades se constituyan en el epicentro del reacomodo de la ofensiva paramilitar?

Una última conclusión de tipo metodológico señala la importancia de vincular la variable espacial al análisis de los fenómenos de violencia y desarme en Colombia. En este caso, se demostró que la incorporación del factor territorial al análisis permite acercar al investigador a la comprensión holística de aspectos como el control territorial que caracterizó a la ofensiva paramilitar y que se pone de manifiesto en los contextos espaciales y temporales analizados en este documento.

Referencias

- Buzai, G. (2010). Análisis espacial con sistemas de información geográfica: sus cinco conceptos fundamentales En G. Buzai (ed.), *Geografía y sistemas de información geográfica. Aspectos conceptuales y aplicaciones 1-24*. Luján: Universidad Nacional de Luján.
- Cárdenas, E. y Villa, E. (2012). La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales. *Vniversitas Económicas*, 12/10, 2-18.
- Centro de Memoria Histórica. (2013). *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [Codhes]. (2016). Número de personas desplazadas por municipio y años de llegada. Recuperado de http://www.codhes.org/index.php?option=com_si&type=1
- Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. (2016, febrero). *El fin del conflicto pasa por el desmonte del paramilitarismo*. Ponencia presentada en El Foro sobre la Terminación del Conflicto, Hotel Tequendama, Bogotá.
- Criminalidad azota Medellín. (2016). *El Universal*. Recuperado de <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/criminalidad-azota-medellin>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2005). Censo general 2005. Proyección de población municipal por área 2005-2009.

- Giraldo Moreno, J. (2015). *Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos*. Espacio Crítico.
- Goodchild, M. F., Anselin, L., Appelbaum, R. y Herr, B. (2000) Toward Spatially Integrated Social Science. *International Regional Science Review*, 23(2), 139-159.
- Holguín, D. (2014). El bipartidismo en Colombia: una historia de violencia y conflictos socio-políticos en el territorio nacional entre 1865-1957. Recuperado de https://www.academia.edu/7197437/el_bipartidismo_en_colombia_una_historia_de_violencia_y_conflictos_sociopoliticos_en_el_territorio_nacional_entre_1865-1957
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz [Indepaz]. (2010). *V informe sobre narcoparamilitares en el 2010*.
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz [Indepaz] (2013). *VIII informe sobre grupos narcoparamilitares*.
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz [Indepaz] (2014). *X informe de seguimiento a la presencia de los grupos narcoparamilitares, actividad que viene realizando desde 2006*.
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz [Indepaz] (2015). *VI informe sobre paramilitarismo*.
- Lair, E. (s. f.). *Los grupos paramilitares en Colombia. Entre la guerra y la paz*.
- Leal Buitrago, F. (2006). La política de seguridad democrática 2002-2005. *Análisis Político*, (57), 3-30.
- López Becerra, L. (2013). *Desmovilización paramilitar e inseguridad urbana en Colombia* (tesis de especialización). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.
- López, C. y Sevillano, O. (s. f.). Balance político de la parapolítica. *Corporación Nuevo Arco Iris*, 1-27.
- Molano Bravo, A. (2013). *Dignidad campesina entre la realidad y la esperanza*. Bogotá: Ícono.
- Patiño, O. (2003). El fenómeno paramilitar en Colombia. *Bajo el volcán*, 3(6), 71-91.
- Rentas criminales en Medellín por hurto y extorsión ascienden a cerca de 58 mil millones de pesos anuales. *RCN radio*. Recuperado de <http://www.rcnradio.com/locales/rentas-criminales-medellin-hurto-extorsion-ascienden-cerca-58-mil-millones-pesos-anuales/>
- Rivas Nieto, P. y Rey García, P. (2008). Las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964-2006). *Confines*, 4(7), 43-52.
- Tirado Mejía, A. (1978). Colombia. Siglo y medio de bipartidismo. En J. Melo (ed.), *Colombia hoy* (1-56). México: Siglo XXI.